

OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DEL C.T.C.P. SOBRE LAS MEJORAS AL DUR 2420 DE 2016. PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN PARTE 1

NOTAS INTRODUCTORIAS

1. Lo primero que debo manifestar es que este proyecto nos da la razón a los que siempre nos hemos opuesto a la adopción de NIIF en Colombia, más aún el estándar para PYMES, pues siempre expresamos que ese estándar compuesto por 35 secciones fue y siguen siendo construido para PYMES europeas.
2. En los años previos a la expedición de la ley 1314 de 2009 argumentamos con varios enfoques la inconveniencia de realizar la adopción de manera rasa como finalmente se hizo.
3. En la ley 1314 de 2009 se estableció una palabra muy diferente a lo que finalmente se hizo: adoptar. La palabra que está escrita en la ley 1314 de 2009 es CONVERGENCIA y eso tiene un significado y connotación muy distante de la acepción ADOPTAR
4. Es gratificante observar como antiguos detractores de nuestra posición que nos tildaban de enarbolar un nacionalismo insulso y argumentos anacrónicos, hoy encuentran razón en dichas posturas.

SOBRE EL DOCUMENTO

1. En el documento se presentan argumentos estadísticos que amparan la reforma que se propone llevar a cabo al modelo contable colombiano.
2. Tal como se advirtió en su momento, Colombia en su gran mayoría tiene MIPYMES, tanto en las sociedades comerciales, personas naturales comerciantes y entidades sin ánimo de lucro, como se refleja en tablas del RUES, siendo el 80% microempresas, el 15% pequeñas empresas y el 94% de las ESAL son microempresas en el 94%.
3. Las cifras anteriores no distan demasiado de la realidad existente en los años 90 e inicios de los años 2.000 que debatimos en distintos espacios sobre el asunto.

SOBRE LAS PROPUESTAS

1. Adición del artículo 1.3.1.1.

En el momento se está discutiendo a nivel nacional una reforma a la profesión que implica reformar la ley 43 de 1990 y me sorprende que por este documento se pretenda adicionar por esta vía normas que deben cumplir los contadores públicos, incorporando la obligación de que los contadores públicos acaten las normas de aseguramiento de la información, igualar las normas de auditoria a estas normas y despedir por esta vía de manera definitiva la técnica de interventoría de cuentas que se consagra en el código de comercio.

La revisoría fiscal ni es auditoría ni es aseguramiento.

Sobre esta afirmación existen infinidad de documentos que demuestran por qué la revisoría fiscal no es auditoría. En varios escenarios se ha expuesto esto desde varios puntos de vista, desde lo histórico hasta lo técnico. Adjunto un documento de mi autoría sobre el tema.

El país debe fortalecer la revisoría fiscal como institución de fiscalización y a los contadores públicos como profesionales habilitados para este ejercicio. A la primera, regulando en materia de interventoría de cuentas, en tanto que esta es vigilancia permanente de la organización fiscalizada y proscribir toda norma que ligue auditoría con la revisoría fiscal y a los segundos protegerlos como ejecutores de esta vigilancia, en tanto que su deber ser consiste en defender por encima de todo el interés público y al Estado le asiste la obligación de garantizar este ejercicio emitiendo normas que permitan al revisor fiscal cubrirse ante las evidentes amenazas existentes al interior de las organizaciones que siempre buscan vulnerar la ley para su beneficio y, el interés público, únicamente tiene como estandarte a la revisoría fiscal. De no ser por la revisoría fiscal peores cosas se conocerían.

2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

GRUPO 1

Definitivamente el ámbito de aplicación de NIIF completas para las grandes empresas calificadas según las normas vigentes, las entidades del sector financieros que en la propuesta se definen por cada sector, según el estatuto orgánico del sistema financiero y, por supuesto, las que voluntariamente se deseen acoger a este modelo.

GRUPO 2

En lo personal considero que este grupo no debería aplicar NIIF PARA PYMES. Siempre lo hemos planteado de esta forma.

La razón de ello es básicamente porque, como lo muestra el documento en el inicio, la gran mayoría de las empresas en Colombia son mipymes y para los fines que rinden cuentas son para sus propios dueños y buscan más facilidad en la comprensión del lenguaje del negocio y su organización.

Este estándar debería ser optativo para la gran mayoría de empresas y obligatorio para aquellas que sin pertenecer al grupo 1 ya son controladas por alguna superintendencia y por el impacto en la sociedad deba ser así y excluyendo algunos temas que generan costos adicionales e innecesarios; por ejemplo, el tema del valor razonable para propiedad de inversión únicamente se debería hacer cuando haya una decisión en firme de realizar el bien.

La contabilidad que sería interesante para las demás empresas debería basarse en otros modelos de contabilidad como el de modelo histórico y únicamente si va a buscar el mercado internacional que armonice sus cifras con el modelo que le exijan en el exterior. Esto ya estaba contenido antes en el decreto 2649 de 1993 y los impulsores de NIIF desoyeron las palabras.

Estoy de acuerdo con la propuesta de derogar el artículo 1.1.2.5

3. PERTENECIENTES AL GRUPO 3

Considero que el punto 6 puede mejorarse tanto en redacción como en inclusión de un mayor número, porque la realidad de las regiones puede demostrar con total claridad que muchas empresas que están generando ingresos brutos del orden de 4.000 salarios mínimos mensuales vigentes aún siguen siendo familiares no solo en su administración sino en el objetivo que busca sostenimiento básico de las familias ligadas a ellas.

Si se mantiene este tipo de criterios, redactar de forma tal que no se preste a equívocos ni a interpretaciones; decir, por ejemplo, 4.000 salarios mínimos mensuales vigentes de ingresos brutos (sin importar el origen), sin incluir lo que tributariamente se conoce como ganancias ocasionales.

En el párrafo 1 decir “que realicen ventas en efectivo” es completamente limitante porque esto significa que ÚNICAMENTE deben vender en efectivo y no podrían vender con otro medio de pago y el hacerlo con otros medios de pago no los convierte en perteneciente al grupo 2.

En el mismo párrafo excluir del grupo 3 a una empresa porque se financie con recursos de terceros es atentatorio contra el desarrollo de la libre empresa. Lo que debe hacer el sector financiero es aprender a diferenciar entre los estados financieros del grupo 2 del grupo 3. El problema es el sector financiero, e incluso le puede servir más la información de caja que la de devengo.

En este mismo párrafo creo que no van los temas fiscales que al final se habla de no responsables de impuesto a las ventas y al consumo. El decreto es un decreto contable y debe hablar ese lenguaje.

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ DÍAZ

Contador Público